



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
ASUNTOS JURÍDICOS

No. GS-2026-

/ MEBOG-ASJUR-13

Bogotá D.C.

Señora
JEIMY JUBELY VERANO VELASCO
ruido.infernal@outlook.es
Bogotá D.C.,

Asunto: respuesta GS-2026-008632-JESEP y GE-2026-011511-DIPON

Cordial saludo, en cumplimiento al artículo 21 la Ley 1755 de 2015 y conforme a la Resolución número 01550 del 28 de mayo de 2009, *“por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Policía Metropolitana de Bogotá”*, me permito dar respuesta de acuerdo con nuestras competencias, así:

“1. Se me informe las actividades que le corresponden como Policía respecto de la Ley 1801 de 2016 y la Ley 2450 de 2025 en lo que respecta al control de la contaminación acústica.

De acuerdo con la información suministrada mediante comunicación oficial GS-2026-157764-MEBOG del 17 de marzo de 2026, la Estación de Policía Suba, a través del CAI Mazurén, informó que al establecimiento BOLIRANA MI LLANO se le impuso medida correctiva de suspensión temporal de la actividad, por incumplimiento de normas de convivencia.

En cuanto al marco normativo, la Policía Nacional, conforme al artículo 20 de la Ley 1801 de 2016, ejerce funciones de policía para garantizar la convivencia mediante la ejecución material de las decisiones adoptadas por la autoridad competente.

Adicionalmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2450 de 2025 “Ley contra el Ruido”, se fortalecen las facultades para intervenir comportamientos que afecten la tranquilidad, incluyendo la posibilidad de aplicar acciones progresivas, como las medidas preventivas, pedagógicas y de control que correspondan.

En ese sentido, las actividades institucionales comprenden acciones preventivas como la mediación, y, de ser procedente, la imposición de las medidas correctivas a que haya lugar, todo ello de ser el caso, en articulación con las autoridades administrativas y ambientales competentes, en el marco de las competencias legales asignadas.

“2. Se me informe los criterios aplicados a la hora de hacer las actividades preventivas y de control, esto en concordancia a lo expresado por el agente donde afirma que el establecimiento al tener toda la documentación al día puede generar ruido, o que al ser diciembre la norma quizá exprese alguna salvedad”.

La Estación de Policía Suba¹, precisó que no existe disposición normativa que autorice el exceso de ruido en ninguna época del año, incluyendo el mes de diciembre.

¹ información suministrada mediante comunicación oficial GS-2026-157764-MEBOG del 17 de marzo de 2026, firmado por el señor intendente Ricardo Alfredo López Suárez, Comandante Patrulla de Vigilancia CAI Mazurén.

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de requisitos documentales no habilita a los establecimientos de comercio para exceder los niveles permitidos de emisión sonora, por lo que la actuación policial se rige por el principio de prevalencia del interés general, en armonía con el derecho fundamental al descanso y a un ambiente sano.

“3. Se me informe sobre el impedimento que tiene la policía para ejercer control cuando la queja es anónima, ya que, como se expresó en el documento GS 2025-548783-MEBOG, nos hace notar dos cosas, la primera que la policía sabe que tiene la facultad para ejercer el control, la segunda que lo está condicionando a que solo se hace si se remiten datos del denunciante, situación evidentemente en busca de favorecer el establecimiento”.

Frente a su inquietud¹, es importante precisar que, conforme a la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, las autoridades deben dar trámite a las peticiones anónimas siempre que contengan elementos mínimos que permitan su gestión.

Ahora bien, respecto al contenido del radicado GS-2025-548783-MEBOG, se evidencia que la unidad policial sí realizó acciones iniciales de verificación y control, tales como revista al establecimiento, señalándole la inconformidad ciudadana a sus propietarios.

No obstante, si bien el aporte de información adicional puede facilitar actuaciones más contundentes, la Policía Nacional mantiene la facultad de actuar preventivamente con base en la verificación directa de los hechos, conforme a la misionalidad institucional.

Bajo este entendido, las actuaciones adelantadas deben interpretarse como parte de un proceso progresivo de intervención policial, en el cual se combinan acciones preventivas, disuasivas y correctivas, orientadas a restablecer las condiciones de tranquilidad pública, sin que ello implique inobservancia de las competencias legales ni desatención de las solicitudes ciudadanas.

“4. De acuerdo con el oficio GS-2025-531522-MEBOG, se me informen porque no son resueltas de fondo las peticiones sobre eliminar la fuente de ruido (música), y en lugar a ello evaden la petición argumentando que el local tiene los documentos al día, cuestión muy distante del objeto petitionado”.

La Estación de Policía que conoció del caso, mediante el comunicado oficial descrito en párrafos precedentes¹, ha informado que, frente al contenido del radicado GS-2025-531522-MEBOG, las actuaciones desplegadas en su momento se enmarcaron en labores de verificación y control, incluyendo la revisión de requisitos documentales del establecimiento, así como la realización de visitas al sector.

No obstante, en atención a su inconformidad, resulta pertinente precisar que dichas actuaciones no excluyen ni sustituyen la obligación de verificar directamente la posible afectación a la convivencia derivada de emisiones de ruido, en los términos de la Ley 1801 de 2016, particularmente frente a comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas en el entorno.

En ese sentido, si bien en el citado radicado se indicó que no se evidenció exceso de ruido en los momentos de verificación, así como la sugerencia de aportar elementos probatorios adicionales, tales manifestaciones deben entenderse dentro de un contexto en el cual la percepción del ruido puede variar según el momento de la intervención, sin que ello implique la inexistencia del comportamiento reportado ni limite la posibilidad de futuras actuaciones policiales.

De igual forma, la solicitud de evidencias al peticionario no constituye una carga exclusiva para la ciudadanía, sino un elemento complementario que puede contribuir a la oportunidad y efectividad de las medidas correctivas; no obstante, la Policía Nacional, mantiene la facultad de adelantar verificaciones autónomas y adoptar las medidas a que haya lugar cuando se evidencien comportamientos contrarios a la convivencia.

En atención a lo anterior, la Estación de Policía Suba ha informado que las acciones de control han sido reorientadas y fortalecidas hacia la verificación material del impacto auditivo en el entorno residencial, lo cual se refleja en la imposición de medidas correctivas cuando se ha logrado constatar la afectación a la tranquilidad ciudadana.

“5. Se me informe sobre las actuaciones realizadas por la policía de Suba para el cumplimiento de la Ley 2450 de 2025 en concordancia con el “ABC Ley del Ruido” emitido por la Policía Nacional”.

La Estación de Policía Suba informó¹ que ha incorporado el control de ruido dentro de sus planes de vigilancia, priorizando zonas como la calle 168, estableciendo canales de recepción de quejas y adelantando actividades de control en coordinación con otras autoridades competentes.

“6. De acuerdo con el escrito GS-2025-651572-MEBOG, requiero se remita el acta del “comité de recepción, análisis, evaluación y trámite de quejas, reclamos e informes (CRAET) donde se trató la queja interpuesta por medio del radicado No. 772267-20251007.

7. De igual manera y en concordancia con el numeral anterior, se me remita lo siguiente:

- Las actas o soportes que evidencien que se cumplió con lo siguiente “se programó una actividad de Inspección Vigilancia y Control (IVC) con las diferentes que regulan los establecimientos de comercio, donde nos manifestaron que harán la respectiva auditoria al establecimiento mencionado como “MI LLANO” con el fin de establecer las conductas contravencionales que se encuentra infringiendo y así poder hacer la regulación del sonido; con el fin de crear un ambiente sano tanto para los residentes del sector garantizando así los derechos fundamentales”.*
- Se remita copia de “acta de compromiso en el cual él uniformado, en calidad de generadores de una queja, manifiesta su interés de coadyuvar de manera directa al desarrollo de las políticas institucionales en el despliegue del proceso de integridad policial; cumpliendo a cabalidad con las ordenes, instructivos, manuales, normas legales, reglamentos disciplinarios y demás que permitan corregir aquellas conductas que de mi parte ha generado un inconformismo con la comunidad o algún miembro de la institución”*

De acuerdo a los numerales 6 y 7, respecto a las actas del comité CRAET y otros documentos¹, se informa que los mismos tienen el carácter de información pública reservada, en los términos de la Ley 1712 de 2014, por cuanto contienen información relacionada con terceros, así como datos personales que gozan de protección constitucional y legal.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la citada ley, en concordancia con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, las autoridades están obligadas a garantizar la confidencialidad de la información que involucre datos personales, sensibles o información que pueda afectar derechos de terceros, tales como la intimidad de las personas.

En consecuencia, el acceso a este tipo de documentos debe ser limitado o restringido, en tanto su divulgación íntegra podría vulnerar derechos fundamentales de terceros.

“8. Atendiendo el infierno que se vivió la noche de ayer 13 de febrero de 2026, donde como se evidencia en el registro de llamada anexo la policía no asistió, solicitó se remita la bitácora u otro elementos utilizado para llevar el control del servicio prestado donde se evidencie la función que se encontraban haciendo los policías a partir de las 8:30 pm momento donde se llamó y hasta llegada la media noche, con el fin de corroborar el impedimento para atender el llamado de denuncia sobre el ruido”.

En primer lugar¹, frente a la solicitud consistente en “remitar la bitácora u otros elementos utilizados para llevar el control del servicio prestado”, es preciso señalar que dicha información correspondería

a registros institucionales tales como libros de población, minutas de vigilancia y/o sistemas tecnológicos, por lo tanto, se informa que, en caso de existir la información requerida, estos documentos se encuentran amparados por reserva legal, en los términos de la Ley 1712 de 2014, en razón a que contienen información de carácter sensible y estratégico relacionada con la seguridad pública y el funcionamiento del servicio policial.

Lo anterior, resulta pertinente traer a colación el reciente criterio jurisprudencial fijado por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, Magistrado ponente Felipe Alirio Solarte Maya, el cual analizó expresamente la naturaleza jurídica de los diferentes registros que se llevan en los libros de las unidades policiales y dispositivos tecnológicos, concluyendo que, si bien ostentan en principio carácter público, su contenido puede adquirir la condición de información público-reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos, de terceros o de seguridad, en los siguientes términos:

“30. Si bien es cierto que la ley establece que el libro de población y minuta de vigilancia son documentos de naturaleza pública, lo cierto es que, estos tienen una connotación de público-reservado en consideración a que en ellos se consigna información privada como lo es, los desplazamientos efectuados por el personal policial, planes operativos y el registro de los números de identificación de las armas de dotación, entre otros. Así mismo, en estos libros se consigna información de terceras personas que podría afectar derechos personales y privados.

31. Por su parte, en lo concerniente a los registros de comunicación y consulta en los dispositivos asignados a la Policía Nacional, es diáfano para la Sala que, estos recopilan datos de terceros, consultados en los sistemas policiales, reportes de patrullajes, codificaciones de direcciones y reportes internos que, de compartir esta información sin una adecuada custodia, se pondría en riesgo información de terceros, tanto personal civil como de los funcionarios que hacen parte de la institución policial.

32. En consideración a lo expuesto, estima la Sala que, con la normatividad expuesta y los preceptos jurisprudenciales mencionados, la información requerida (...), cuenta con calidad de reserva legal establecida en la Ley (...).”

Por tal motivo, la información requerida se encuentra sujeta a las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas relacionadas con la protección de la seguridad pública e información de terceros y datos de los servidores públicos.

“9. Se me informe el procedimiento estipulado por la policía cuando se presenta un caso de inconformidad con la respuesta a una queja, y si esta inconformidad no debe ser resuelta, situación que sucedió de acuerdo con la trazabilidad del correo adjunta, donde se expresa que la respuesta a la queja al no considerarla como solución se requería de otra acción sin recibir respuesta de ningún tipo

10. En concordancia con el punto anterior, se me informe si los correos enviados solicitando una respuesta que verdaderamente sea eficaz, gozan o no del carácter de derecho de petición, ya que, como se manifestó, no han sido contestados de ninguna manera”.

Frente a los numerales 9 y 10, la Estación de Policía Suba¹, como dependencia responsable del trámite, ha informado que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, toda comunicación presentada por cualquier medio, incluidos los correos electrónicos, que contenga una solicitud, queja o reclamo, se entiende como derecho de petición, siempre que permita identificar el objeto de la solicitud.

En ese sentido, cuando un ciudadano manifiesta inconformidad frente a una respuesta emitida por la administración, tiene la posibilidad de solicitar aclaración, ampliación o complementación de la respuesta, presentar una nueva petición orientada a obtener una solución de fondo, acudir a los

canales institucionales como la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), o activar los mecanismos que considere pertinentes.

Ahora bien, la unidad policial señaló que se han impartido instrucciones al interior de la Estación para garantizar que todos los requerimientos sean atendidos de manera oportuna, clara, de fondo y congruente con lo solicitado por los ciudadanos.

“11. Se me remita copia de los documentos que soporten las acciones de control que han realizado en el sector sobre la prohibición de emitir ruido, en especial del establecimiento objeto de la queja, entendiendo que este es un sector residencial por lo tanto los establecimientos de comercio no pueden emitir ningún tipo de ruido además del que produzcan las personas en una interacción normal”.

Frente al numeral 11, la Estación de Policía Suba¹, a través del CAI Mazurén, informó que, en desarrollo de las actividades de control adelantadas en el sector, se impuso medida correctiva consistente en la suspensión temporal de la actividad al establecimiento denominado BOLIRANA MI LLANO, por comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la emisión de ruido.

En cuanto a la solicitud de remisión de los documentos que soportan dichas actuaciones, se informa que estos hacen parte de un procedimiento policial y contienen información relativa a terceros, así como datos personales y elementos propios de la actuación, razón por la cual su acceso se encuentra limitado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012.

En efecto, la documentación asociada a medidas correctivas puede incluir datos de identificación, circunstancias fácticas del procedimiento y demás elementos que, de ser divulgados de manera íntegra, podrían afectar derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso de las personas involucradas.

Atentamente,

Teniente coronel **ELIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SANTISTEBAN**
Jefe Asuntos Jurídicos Policía Metropolitana de Bogotá


Elaboró: Abogado MANUEL HERNÁNDEZ
MEBOG ASJUR

Revisó: SI. JEISSON DAVID SIERRA NÚÑEZ
MEBOG ASJUR

Fecha de elaboración: 27/03/2026
Ubicación: C://06/Mis documentos/26

Avenida la Esmeralda 22-68, 4º piso
Teléfono: 3203023976
mebog.coman-asjur@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA